

Golpe de Estado en marcha

Oswaldo León

Con la mira puesta en el petróleo y demás recursos estratégicos venezolanos, Estados Unidos ha recrudescido sus políticas injerencistas en ese país, blandiendo incluso la amenaza de una intervención armada, con el manido argumento de ser adalid de la democracia, para dar el golpe de gracia al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y al “mal ejemplo” de su proyecto soberano.

Aunque esta argucia debería estar desgastada por lo ocurrido en las ocupaciones bélicas registradas últimamente en países del Medio Oriente ampliado, para no hablar de la larga historia de intervenciones en nuestra región que dejaron una estela de dictaduras, los gobiernos derechistas de la región han cerrado filas con esta arremetida, poniendo en riesgo el compromiso de mantener a Latinoamérica y el Caribe como “Zona de Paz” que fue adoptado por unanimidad en la II Cumbre de la CELAC, el 29 de enero de 2014.

Como para no dejar dudas a dónde van los tiros, la Casa Blanca designó a Elliott Abrams como enviado para “restaurar la democracia” en Venezuela. Sí, el mismo que durante el gobierno de Reagan participó en la dirección de las operaciones contrainsurgentes en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en los años '70 y '80, las cuales se apoyaban en el apuntalamiento de grupos paramilitares y de exterminio en dichos países.

Operaciones silenciosas que salen a luz con el escándalo Irán-Contra nicaragüense, debido a que para financiar a ésta se monta un mecanismo de venta de armas a Irán y de drogas del Cartel de Medellín en Los Ángeles. En el proceso abierto por estos acontecimientos, Abrams se declara culpable de haber ocultado información, pero George Bush padre al iniciar su gobierno le indulta. Y es así que, poste-

riormente, aparece como asesor de seguridad nacional en las guerras en Irak y Afganistán durante la presidencia de George Bush hijo. Y ahora, como procónsul en la intentona golpista en Venezuela.

En el plano interno, como operador en el tablero intervencionista aparece Juan Guaidó, un político prácticamente desconocido, integrante del partido Voluntad Popular de extrema derecha que entre 2014 y 2017 protagonizó las llamadas “guarimbas”, para propiciar un golpe de Estado por medio de disturbios violentos que dejaron el lamentable saldo de casi 200 personas asesinadas (70% chavistas) y miles de heridos.

De hecho, es un cuadro formado por el Centro para la Acción No Violenta y Estrategias Aplicadas (Canvas, por sus siglas en inglés), que instruye a jóvenes derechistas en las técnicas de los “golpes de estado blandos” formuladas por Gene Sharp, pues “en 2005 fue captado como ‘líder estudiantil’ venezolano para viajar a Belgrado, Serbia, y comenzar a entrenarse para una insurrección”. Operación financiada “en gran parte a través de National Endowment for Democracy (NED), una creación de la CIA que funciona como el brazo principal del gobierno de Estados Unidos para promover el cambio de régimen”¹.

El 5 de enero, Guaidó es designado presidente de la Asamblea Nacional y 18 días después en un mitin callejero se autoproclama “presidente encargado”. Washington le reconoce de inmediato y en seguidilla los países que conforman el Grupo de Lima. Sin embargo, y pese a las presiones de ese país, no logran que suceda lo mismo en la Organización de los Estados Americanos, más allá de que su secretario

1 <https://bit.ly/2Xafynw>

general, Luis Almagro, por su propia cuenta si lo hace. Tampoco consiguen que este cometido prospere en la Organización de Naciones Unidas pues en la votación extraordinaria convocada por EE.UU. la mayoría de sus Estados miembros se pronuncia en contra. Y la Unión Europea no ha fijado una decisión.

Si bien desde que inicia en 1998 el gobierno bolivariano presidido por Hugo Chávez, EEUU mantiene una línea desestabilizadora, que incluye el fallido golpe de Estado en abril de 2002, es a raíz de la caída del precio del petróleo que las sanciones económicas se intensifican -habida cuenta que Venezuela no ha logrado superar el rentismo petrolero- para revertir el proyecto en curso al crear un clima de malestar por la carencia de bienes básicos.

El 9 de marzo de 2015, aduciendo que Venezuela representa un “riesgo extraordinario” para la seguridad de EE.UU., Barack Obama aprueba un primer paquete de medidas, que posteriormente se incrementan bajo el Gobierno de Trump. Se estima que las pérdidas por las medidas coercitivas unilaterales (embargos comerciales, bloqueos financieros, apropiación de activos, como en el caso de la empresa CITGO, etc.) bordean los 34 mil millones de dólares, que equivalen a 8 años de comida y medicinas para los habitantes de la tierra de Bolívar.

Con este telón de fondo, la intensa campaña mediática global se ha ocupado de ir creando las condiciones psicosociales para la intervención, sobre todo para “posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de *crisis humanitaria* por falta de alimentos, agua y medicamentos; hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está ‘cerca del colapso y de implosionar’ demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas”, conforme establece Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de EEUU, en las 12 recomendaciones de la *Operación Venezuela Freedom-2* develadas en 2016 ².

² Operación Venezuela Freedom-2, 25-02-2016, <https://bit.ly/2TXh5LG>

En las circunstancias, esta es la carta que está en juego. Se trata de un operativo previsto para el 23 de febrero con epicentro en la ciudad colombiana de Cúcuta, bajo la figura de la “ayuda humanitaria” desplegada por la fuerza militar del Comando Sur del Pentágono, con show incluido. En este punto cabe destacar la posición de la Cruz Roja al señalar que tal operativo carece de todo carácter humanitario, cuanto más que está gestionado por fuerzas militares que amenazan con invadir un territorio soberano. Como han señalado varios analistas: un Caballo de Troya acompañado de flashes y cámaras para desencadenar un incidente militar de consecuencias inciertas. Y es que esta es la misma trama seguida en las ocupaciones de Irak, Libia, Siria, entre otras.

Si efectivamente se tratara de una preocupación por las carencias que la población de Venezuela efectivamente padece y no un “cambio de régimen”, bastaría poner fin al bloqueo y sanciones financieras que impiden recibir el pago que le corresponde por sus exportaciones billonarias. En lugar de abarrotar depósitos en Cúcuta unilateralmente, EE.UU. debería canalizar esos aportes a través de los canales instituidos en la ONU.

La cuestión es que Trump al reconocer (de hecho, designar) al autoproclamado “presidente”, pretende arrogarse potestades que atropellan un principio básico del derecho internacional: la legitimidad del voto popular, que en Venezuela se pronunció a favor de Nicolás Maduro. En esta línea, busca avanzar en la tramoya del golpe de Estado que está en curso desde hace 20 años, contando con el respaldo de gobiernos de la región que consideran que sus países deben permanecer como patio trasero del vecino del Norte. Paradójicamente, aunque han demostrado ser incapaces para garantizar derechos sociales básicos, ser proclives a la criminalización de la protesta social, establecer mecanismos de judicialización de la política para anular opositores, entre otras cosas, ahora pretenden erigirse como tribunos de la democracia para juzgar al gobierno legítimo de Venezuela. Y entonces cabe la pregunta: ¿con qué calidad moral? ☹

Bolsonaro: peón de Trump para intervenir en Venezuela

Renata Mielli

La criminalización de la política y la promesa de eliminar la “ideología izquierdista” dieron como resultado la victoria de la antipolítica. Si fuera posible resumir en una sola frase lo que llevó a la victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2018, tal vez ésta sea la más completa y emblemática. Por supuesto, hay muchas más cosas entre el cielo y la tierra de lo que se puede imaginar nuestra vana filosofía, como dijo William Shakespeare hace más de 400 años.

Entre ellas, la crisis del capitalismo que golpeó a las principales economías del mundo en 2008, contaminando toda la economía global y acelerando los conflictos geopolíticos por la disputa de hegemonía internacional entre el imperialismo norteamericano y el bloque de poder establecido por la constitución de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Este telón de fondo de la disputa por el poder global es importante para entender tanto los acontecimientos en América Latina como el crecimiento de la ultraderecha en los propios Estados Unidos y en otros países del mundo.

Renata Mielli es periodista, coordinadora general del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación y secretaria general del Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

América Latina, una piedra en el zapato de EE.UU.

Las experiencias de los gobiernos democráticos y populares en América Latina han sido un factor determinante para acelerar el reordenamiento de las fuerzas en la geopolítica internacional y amenazar efectivamente el poder de Estados Unidos. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela, no al mismo tiempo ni tampoco en la misma medida, se convirtieron en obstáculos para los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en la región. Recordemos la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se descarriló y, por otro lado, el fortalecimiento del Mercosur y la creación del Banco del Sur y de UNASUR.

Brasil y Venezuela jugaron un papel clave en este proceso. Ya sea por el peso de sus economías en el continente, o por el tamaño y la riqueza natural que tienen.

Golpes fallidos en Venezuela

Ha habido numerosos intentos para derrocar al ex presidente Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro. Golpes, desestabilización política, sabotaje económico, imposición de resoluciones y sanciones internacionales contra Venezuela, manipulación de la opinión pública internacional -que trata de caracterizar al país como una dictadura- entre otras iniciativas,

que han fracasado hasta ahora. La respuesta del pueblo venezolano ha sido afirmar su soberanía y defender los logros sociales que han cambiado al país en los últimos 20 años.

Desde sus inicios, el gobierno bolivariano ha colocado en el centro de sus acciones políticas los ámbitos de la educación, la cultura y la comunicación. Abiertamente izquierdista, defensor del socialismo y de la construcción de la Patria Grande, Hugo Chávez entendió, quizás más que todos los demás gobiernos del campo democrático y popular que surgieron en el continente, que además de dar empleo, vivienda, salud y más calidad de vida a la gente, era necesario luchar por las ideas en el seno de la sociedad. En otras palabras, era necesario disputar la hegemonía ideológica contra el pensamiento neoliberal y cuestionar los paradigmas del capitalismo. Elevar el nivel de conciencia de la sociedad es empoderar. Y una sociedad consciente de sus derechos y deberes no se somete a golpes de Estado orquestados por una élite parasitaria como la venezolana y por los intereses estadounidenses en las reservas de petróleo de ese país.

Elecciones, plebiscitos, constituyentes y otros instrumentos de participación popular en la definición de las orientaciones del Estado y de elección de sus representantes han demostrado que, aun con problemas y críticas, la mayoría de los venezolanos apuesta por y quiere mantener los gobiernos bolivarianos.

Golpe victorioso en Brasil

Desafortunadamente, en Brasil, la historia ha sido diferente. Entre los muchos factores que diferencian la experiencia venezolana de la brasileña, cabe destacar el elemento de la disputa de ideas en la sociedad. A diferencia de los gobiernos bolivarianos, los gobiernos de Lula y Dilma en Brasil se han abstenido de confrontar el pensamiento neoliberal, ya sea en la economía, en la cultura o en los valores sociales. Se creía que sería posible construir un proyecto de desarrollo económico y social con distribución del ingreso, combate

a las desigualdades y marcado por la defensa de la integración regional, la soberanía y el protagonismo de los países latinoamericanos ante el mundo, en alianza con los oligopolios privados de la comunicación, históricamente portavoces y representantes de la élite económica brasileña e internacional.

Mientras que en Venezuela, Chávez y luego Maduro no dudaron en debatir temas sensibles con la sociedad y enfrentar la propaganda internacional contra sus gobiernos, en Brasil, Lula y Dilma renunciaron a su papel de mostrar a la sociedad que sus políticas públicas de educación, salud, vivienda, empleo e ingresos eran diferentes porque partían de una visión diferente de la sociedad. Incluso renunciaron a defenderse públicamente de la campaña de desestabilización política que tuvo su primer episodio -conocido como Mensalão- en 2005, hasta el golpe de estado mediático-legal-parlamentario de 2016.

El combustible para esta campaña fue el argumento de la corrupción. Si en Brasil la política y los movimientos sociales ya son tratados negativamente por los medios de comunicación y considerados por la sociedad como algo malo, a partir de los gobiernos de Lula y Dilma se expandió el discurso de la criminalización de la política, pero de una manera más virulenta y con un blanco definido -la izquierda, y dentro de la izquierda, su mayor partido- el Partido de los Trabajadores (PT). No obstante, incluso con toda la campaña mediática contra el PT y la izquierda, Lula fue reelegido, y luego postuló a Dilma, quien también fue reelegida. En otras palabras, la percepción de la gente, la mejora concreta de las condiciones materiales de vida de la gente prevaleció aún sobre los intentos de criminalizar a la izquierda y al PT.

Entonces, la derecha brasileña se dio cuenta de que era necesario ir más allá, que había que romper el orden democrático. Llegó el golpe de estado. Y la derecha también se dio cuenta de que el golpe no era suficiente; era necesario arrestar al mayor líder político de la historia reciente del país. Lula fue conde-

nado y encarcelado sin pruebas, en un proceso que se llevó a cabo fuera de las reglas del debido proceso y totalmente al margen de la Constitución. Era necesario sacar a Lula de la circulación y evitar que fuera candidato a la presidencia de la República. Aún después de ser detenido, Lula continuó en primer lugar en todas las encuestas de intención de voto, hasta la víspera de la homologación de las candidaturas.

Bolsonaro: un efecto secundario del golpe de la derecha

Toda la campaña de criminalización de la política, de la izquierda y los movimientos sociales, se llevó a cabo de forma simultánea y sincronizada en los medios de comunicación y en Internet. En los medios hegemónicos, ganó relevancia y credibilidad, en Internet -especialmente en las redes sociales- ganó escala, velocidad y fue resignificado para provocar emoción en las personas - miedo, ira, odio, prejuicio.

Esta campaña llegó a todo el sistema tradicional de partidos. La derecha neoliberal representada principalmente por el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin y cia. -y todos los demás partidos- también fue empujada a la zanja del sentido común de que era necesario atacar la política. Este no era exactamente el objetivo de la élite económica, que tenía a Geraldo Alckmin como su candidato. Pero cuando se dieron cuenta de que no iba a despegar, rápidamente se apoderaron de Bolsonaro para evitar que Haddad (el candidato del PT) ganara las elecciones.

Bolsonaro -y el pensamiento conservador que representa- ha reunido una legión de seguidores y activistas para difundir mentiras, calumnias y construir una imagen de que él era el candidato que rompió con la política tradicional, el hombre de familia, el defensor de Dios y de Brasil. Él, un ex militar que había ocupado un escaño como diputado federal en la Cámara de Representantes desde 1990, hace 27 años, se proyectó como el candidato

que representaba la ruptura con la política.

Y en su discurso -más allá del fundamentalismo religioso y la prédica en defensa de la familia, la homofobia y el machismo- aparece un enemigo central que debe ser combatido: la izquierda, el PT y todas las formas de activismo, como él mismo dijo en varias ocasiones. Él y sus secuaces se han establecido como portavoces de la lucha contra la ideología de izquierda, el marxismo, el socialismo, las «dictaduras populistas de izquierda», entre ellas Venezuela.

Jair Bolsonaro ataca a Nicolás Maduro en cada oportunidad. Afirma que Brasil se alineará con el mundo para liberar a los venezolanos de la opresión. Denuncia al gobierno venezolano, argumentando que no hay libertad política para los opositores ni democracia en ese país. Ahora, el discurso viene de un hombre que sólo fue elegido porque en Brasil, el principal líder de la oposición es un preso político. Bolsonaro acusa a los venezolanos de impedir la existencia de la oposición, pero en varios momentos de la campaña predicó la eliminación física de los militantes de izquierda: “disparemos la escopeta”, dijo en Acre; para luego señalar que el error de la dictadura brasileña fue “torturar y no matar”, y en el discurso que se transmitió en vivo durante el mitin de la segunda vuelta, fue aún más explícito cuando dijo que los “marginales rojos serán prohibidos en el país”.

El comienzo del gobierno muestra un sesgo autoritario

En menos de dos meses (mientras escribo este artículo), el gobierno de Jair Bolsonaro se revuelca entre innumerables acusaciones de corrupción que afectan a ministros, parlamentarios de su partido, el PSL y sus hijos. Un decreto presidencial ya ha facilitado el acceso a las armas de fuego en Brasil (como prometió en la campaña, que armaría al ciudadano de bien para que se defiendan de los terroristas del MST y de los bandidos), un paquete del ministro Sérgio Moro (el juez de segunda eta-

pa que arrestó indebidamente a Lula) allana el camino para poner fin a la presunción de inocencia y al debido proceso legal. Elimina derechos fundamentales, incita a la policía a matar y al poder judicial a tomar presos. Además, está en trámite acelerado de aprobación una ley antiterrorista, que tipifica a las organizaciones sociales como criminales, abriendo el camino legal para atacar, por ejemplo, al MST. La Ley de Acceso a la Información también ha sido enmendada, aumentando el número de servidores públicos con la facultad de clasificar documentos como secretos y ultra-secretos. Y, además, hay un ataque abierto contra la prensa, lo que demuestra que es parte de la política de este gobierno violar la libertad de expresión en el país.

Asimismo, parte de su gobierno ya se ha expresado a favor de la intervención en Vene-

zuela, hace propaganda de Juan Guaidó y ha anunciado que enviará una misión “humanitaria” al país vecino, apoyando a los movimientos golpistas de Trump y el imperialismo.

Todo esto demuestra que Jair Bolsonaro y su gobierno no tienen ninguna autoridad para atacar la soberanía y la voluntad popular del pueblo de Venezuela y, mucho menos, para criticar al gobierno de Nicolás Maduro.

El mundo está inmerso en una profunda disputa sobre las orientaciones políticas, económicas e ideológicas. El capitalismo, para mantener sus ganancias y su poder, en este momento histórico, necesita imponerse por la fuerza de las ideas y, si es necesario, por la fuerza física. Lo que está en juego en Venezuela y en otros países es exactamente la resistencia a la ofensiva del capitalismo. (Traducción ALAI). ☞



La patria naciendo de la ternura, homenaje a Bolívar y Manuela, 2006
Pavel Éguez

Colombia: corrupción y asesinato de líderes sociales

Pedro Santana Rodríguez

Múltiples problemas afronta el régimen político y la sociedad colombiana. Un primer problema está relacionado con la confrontación armada que la sociedad colombiana padece desde hace por lo menos 60 años. El levantamiento armado tuvo dos causas principales, en primer término, el reclamo de miles de hombres y mujeres que se levantaron en armas reclamando una reforma agraria dado los niveles de concentración y despojo violento de la tierra. El período conocido entre nosotros como la violencia, que en realidad fue una guerra civil no declarada, condujo al asesinato de por lo menos 200 mil colombianos entre los años 1948 y 1966, el desplazamiento masivo de 2'003.600 desplazados y 393.648 parcelas despojadas o abandonadas.¹ El segundo motivo esgrimido para el levantamiento armado fue la exigencia de una reforma política que democratizara el régimen, dado que para salir de la violencia desatada tras el asesinato del líder político popular, Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948), se creó un pacto bipartidista que excluyó de las estructuras del Estado a todas las expresiones políticas que no fueran liberales o conservadoras. Ese pacto bipartidista, denominado Frente Nacional, si bien condujo a la terminación de la conflagración armada entre liberales y conservadores, excluyó a todas las opciones políticas distintas a estos dos partidos políticos, lo que condujo a la organización de las guerrillas campesinas y de izquierda que aún persiste.

1 Oquist, Paul. Violencia, Conflicto y política en Colombia. Bogotá, Biblioteca Popular, págs. 322-324.

Pedro Santana Rodríguez, director Revista Sur.

Entre el año de 1958, en que se estableció el Frente Nacional, y los momentos actuales, la confrontación violenta no ha cesado, pese a los pactos parciales y a las negociaciones políticas para poner fin al enfrentamiento armado. Desde esa fecha, la conflagración armada interna ha dejado 230 mil asesinatos directamente relacionados con el conflicto armado interno, ha dejado 8'500.000 víctimas, ha conducido al despojo o abandono de cerca de 8 millones de hectáreas, siendo las familias de pequeños y medianos campesinos las principales víctimas de ese despojo que comprometió a cerca de 7,4 millones de desplazados, es decir, cerca de 1'400.000 familias, más de 100 mil víctimas de desaparición forzada.²

Los pactos parciales de paz se desarrollaron a finales de los años ochenta del siglo XX y más recientemente el pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, lo que condujo a la desmovilización de cerca de 13 mil combatientes de dicha guerrilla a cambio de un Acuerdo Final que contemplaba un fondo de tierras para la paz, que tendría como meta redistribuir 3 millones de hectáreas entre familias sin tierra, en 12 años, unas reformas políticas como el estatuto de la oposición aprobado en el año 2017 y que entró en vigencia parcialmente en el año 2018, unas reformas políticas que permitieran la reincorporación política de las FARC y su reinserción económica y social, el desmonte de las estructuras paramilitares, la seguridad para los excombatientes, un programa de sustitución concertada de los cultivos

2 Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Actualizados a diciembre de 2018.

ilícitos, programa al cual se han acogido unas 106.000 familias, y la reparación a los más de 8.5 millones de víctimas con la conformación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y reparación, para lo cual se ha puesto en marcha una Comisión de la verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y una Jurisdicción Especial para la Paz. Todas estas medidas marchan a paso lento y, con la llegada de Iván Duque Márquez a la presidencia de la República, corren serio riesgo de incumplimiento, dado que una de las características del nuevo gobierno es la negación del conflicto armado interno. Para el nuevo bloque en el poder no existió este conflicto armado interno, sino lo que existe es una amenaza terrorista.

Las causas de la conflagración armada no han sido superadas. Recientes informes señalan que la concentración de la tierra ha llegado al 0,93% de acuerdo con el reciente censo nacional agropecuario medido mediante el coeficiente de Gini, en que 1 sería que existiera un solo propietario de toda la tierra. Las reformas políticas, en su mayor parte, no han sido aprobadas; desde la firma de los acuerdos con las FARC, 87 de sus excombatientes han sido asesinados. Desde el primero de enero de 2016 y hasta el 10 de enero de 2019, han sido asesinados 566 líderes y lideresas sociales. El 56% de los asesinatos se han perpetrado en los 172 municipios que fueron el escenario principal de la conflagración armada entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Para esos territorios, se proyectó la ejecución de 16 Planes de Desarrollo Territorial, PDT, que a pesar de haber sido formulados, no cuentan con el financiamiento adecuado. El tema de la paz sigue estando en el centro de los debates y de las necesidades expresadas, por lo menos por la mitad de los electores en el país.

La corrupción

Un segundo gran problema está relacionado con la corrupción. La Contraloría General de la República señaló, en el año 2017, que cerca

de 50 billones de pesos, es decir, unos 16 mil millones de dólares, se pierden anualmente en actos de corrupción. Un ejemplo es el caso de la firma brasileña Odebrecht que, de acuerdo con las denuncias de la oposición, habría invertido en actos de corrupción en los diversos proyectos para la construcción de infraestructura cerca de 50 millones de dólares, que sirvieron para “ganar” las licitaciones en las que esta firma participó y ganó. Hasta el momento, y dada la presión de los movimientos sociales, se mantiene abierta la investigación, pero ella solo compromete a mandos medios, sin llegar a los niveles más altos del Estado. Se sabe y existen pruebas de que Odebrecht financió la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010 y las campañas de Juan Manuel Santos y del Candidato Uribe, Oscar Iván Zuluaga en el año 2014. Pero nada se ha investigado el respecto. Duque nombró a un fiscal ad hoc para la investigación de Odebrecht que proviene de su partido, el Centro Democrático, y que no es prenda de garantía para la realización de una investigación independiente. En el mes de agosto, se celebró una consulta anticorrupción a la que acudieron 11,6 millones de sufragantes, se requerían 12,3 millones. No obstante dada la magnitud de la votación se celebró una cumbre política y el Gobierno del presidente Duque se comprometió a tramitar un paquete de nueve proyectos en el Congreso. La mayor parte de esos proyectos han naufragado en el Congreso, no fueron aprobados. La irritación ciudadana ha crecido y exige la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; éste se ha atornillado en el puesto con el respaldo de Duque y del conjunto del régimen político y mediático.

En estas circunstancias, la pregunta obligada es: teniendo esta agenda de problemas, ¿por qué el régimen se empeña en elevar a primer plano la situación de Venezuela y el gobierno asume como su principal bandera la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela? Y la explicación se encuentra precisamente relacionada con la difícil coyuntura interna por la que atraviesa el Gobierno de Duque y su socio,

Álvaro Uribe Vélez, quien en realidad manda desde la trastienda del poder.

Con una oposición crecida en las urnas, pues, el candidato de la izquierda Gustavo Petro se alzó con el 42% del total de la votación en la segunda vuelta presidencial en junio de 2018. Una bancada de oposición que reúne al 20% del Congreso y una movilización social presente en las calles a poco más de dos meses de posesionado Duque en la presidencia de la República. La agenda interna que busca la profundización del modelo neoliberal con, por ejemplo, la extensión del IVA a la canasta familiar, propuesta del Gobierno, fracasó en el Congreso. Duque no logra conformar una coalición mayoritaria en el Congreso y los reclamos populares crecen, así como la exigencia de parar e investigar el asesinato de cientos de líderes sociales. Una salida ha consistido en elevar a primer plano la situación de Venezuela y aliarse con Trump y la extrema

derecha latinoamericana, amenazando con la intervención armada en Venezuela. El Gobierno colombiano se suma a los esfuerzos por desestabilizar aún más el gobierno de Nicolás Maduro, que se debate en una crisis profunda, no solo por el bloqueo económico y la beligerancia política de la oposición, sino por el fracaso de un modelo rentista cuya base única de sustento es la explotación de los recursos naturales y en primer plano la explotación petrolera, pero también preso de una enorme corrupción, en tanto se cierran espacios democráticos para una oposición que no atina, pues de manera irreal plantea una salida sin el chavismo, que por lo visto tiene a por lo menos la mitad de la población del país. La salida en Venezuela debe respetar la soberanía popular para que los venezolanos encuentren alternativas pacíficas que les permitan superar la enorme polarización política, acudiendo a la negociación política para encontrar y construir salidas a la crisis. ☒



Marcha por la paz
(fragmento), 2003
Pavel Égüez

El imperio, Venezuela y el Perú

Hugo Cabieses Cubas

*“No, no estamos en el traspaso de nadie”
(Maurice Bishop, Primer Ministro de Grenada, en el 1er aniversario de la Revolución, marzo de 1980)*

Desde 1945, el planeta es testigo de las acciones de política exterior de los diversos gobiernos de los Estados Unidos, para intentar ser la única potencia hegemónica en un mundo multipolar y pretender que Nuestra América sea su zona de dominación exclusiva, en aplicación de la Declaración del Presidente Monroe (1823): “América para los americanos”, es decir para los Estados Unidos. Como sabemos, los intereses de esta potencia en nuestro continente son de diversos tipos, pero es particularmente destacable el deseo de rapiña que tienen contra Nuestra Amazonía y los ocho países que la poseen, entre los cuales Venezuela y el Perú.

El Gobierno del Perú, gracias al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, defenestrado del cargo en el 2018 por corrupto, creó e impulsó el Grupo de Lima integrado por 13 de los 35 países integrantes de la OEA con el claro objetivo de condenar al gobierno de Venezuela acusándolo de corrupto, dictatorial y responsable de una supuesta crisis humanitaria, incluyendo la migración de más de 650,000 venezolanos hacia el Perú. Con este diagnóstico, ha apoya-

do a la oposición golpista venezolana, alienta la aplicación de la Carta Democrática (2001), promueve la salida militar que desea el gobierno imperialista de Trump y sus aliados, buscando el reemplazo del Presidente Nicolás Maduro al más corto plazo, incluso con un fantoche como es Juan Guaidó.

La política agresiva del gobierno del Perú contra Venezuela ha continuado con el del presidente Martín Vizcarra. Pero está claro que el gobierno del Perú no tiene autoridad moral para condenar al Gobierno del Presidente Maduro, constitucionalmente electo en mayo 2018. Lo que tenemos actualmente es: 1) una crisis de régimen político sin vías de solución; 2) una corrupción sistémica que corroe a toda la clase política y empresarial -Odebrecht, Lava Jato y el Club de la Construcción, son la punta del iceberg-; 3) los cinco presidentes que tuvimos desde 1990 están presos, fugados o acusados de corrupción y genocidio; 4) al actual presidente Vizcarra la corrupción lo salpica; 5) el referéndum convocado por Vizcarra para luchar contra la corrupción y buscar una reforma política por el que el 80-90% votó a favor, ha sido mediatizado por la mayoría parlamentaria fujimorista con su aliado alanista (partidarios de Alan García); 6) el modelo neoliberal extractivista salvaje, autoritario y antidemocrático continúa en “piloto automático”, bajando las vallas ambientales y violando derechos laborales; 7) la ineptitud del gobierno para encarar los desastres naturales recientes que se suman a los del 2017 cuya ayuda fue festinada por los burócratas y empresarios privados; y, 8) la respuesta del régimen a las protestas populares es criminalizadora.

Hugo Cabieses Cubas es economista peruano, asesor parlamentario, ex vice ministro de recursos naturales del Ministerio del Ambiente -MINAM- y militante socialista.

En el caso de la Venezuela actual, esta agresividad se refleja en la voluntad que tiene el imperio de controlar sus recursos naturales, particularmente el petróleo y el gas, así como los minerales del Arco del Orinoco, la Amazonía y la Orinoquía con sus enormes riquezas. Sus agresivas críticas y aprestos golpistas e invasivos contra el país llanero y los presidentes legítimamente elegidos, Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2019), a la cabeza de sus pueblos, tienen como origen su disconformidad con la decisión de ambos presidentes de utilizar los recursos naturales para el beneficio y desarrollo de los desheredados de siempre y en particular por los acuerdos petroleros estratégicos y de otro tipo con China y Rusia.

Sobre el interés de los Estados Unidos en anexarse la cuenca amazónica, desde mediados del siglo XIX, rinde cuenta con todo detalle la historiadora peruana Mariana Mould de Pease en la introducción del informe elaborado por los marinos estadounidenses Lewis Herdon y Lardner Gibbon¹, quienes habían realizado una expedición dizque científica y comercial al Amazonas entre 1851 y 1853, por encargo del Director del Observatorio Naval de Washington el teniente Matthew Fontaine Maury. La historiadora escribe: *“Las exploraciones de Herdon y Gibbon estaban enmarcadas dentro de este amplio proyecto nacional que en la mente del sureño M. F. Maury significaba ligar la cuenca del Missisipi con su similar del Amazonas”*. Y la historiadora nos reporta algo más: *“El planteamiento de Maury respecto a la región amazónica, entonces, es parte del expansionismo económico, científico y cultu-*

1 Lewis Herdon y Lardner Gibbon, *Exploración del Valle del Amazonas*, Monumenta Amazónica, CETA, Quito, 1991.

ral estadounidense, que se sustentaba en el siglo XIX en principios tales como la voluntad del Ser Supremo para integrar el género humano, antes que sobre la noción de que se trataba de un espacio vacío, que este mismo Ser Supremo les concedía”.

Estados Unidos nunca ha respetado ni respeta los derechos humanos de las minorías étnicas y de los migrantes, utiliza las palabras democracia y libertad para influir en la política interna de los países con la finalidad de que sigan bajo su influencia y dominación; solo la ideología capitalista neoliberal es aceptable y en demasiados casos es impuesta con invasiones militares y “golpes de baja intensidad”, utilizando los medios de comunicación a su servicio.

El Perú debería respaldar los esfuerzos de diálogo que buscan una salida de paz a la situación venezolana, como las que impulsan México, Uruguay, los países del Caricom y Noruega con algunos países europeos, desde Montevideo. Pero la cancillería peruana ha reconocido al fantoche autoproclamado, Jorge Guaidó y se ha alineado con los Estados Unidos, Colombia y Brasil para promover una invasión contra el pueblo venezolano, bajo el velo de “ayuda humanitaria”, para repetir Afganistán, Irak, Libia y Siria... creyendo los Estados Unidos que somos su traspatio.

La crisis que vive Venezuela ha dejado de ser un asunto doméstico regional y ha permitido la intervención de actores foráneos y el juego de la geopolítica mundial, donde intervienen las grandes y medianas potencias en una situación de quiebre del escenario internacional donde predomina el interés por determinar el uso de los recursos naturales. (18/02/2019) ☞

Diplomacia de guerra contra Venezuela

Argentina: Desinformación, cinismo y doble vara

Fernando Vicente Prieto

El caso argentino es ilustrativo de otros tantos episodios similares en la mayoría de los países que se presentan a sí mismos como “preocupados por la democracia y los derechos humanos” en Venezuela. Este movimiento de propaganda se desarrolla en el contexto de la ofensiva impulsada por USA e incluye a actores estatales y no estatales.

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, el gobierno encabezado por Mauricio Macri se caracteriza por el alineamiento absoluto a la política del Departamento de Estado norteamericano. Esto incluye especialmente la participación en el asedio contra Venezuela. La narrativa en la que se sustenta la hostilidad diplomática es por lo menos contradictoria con la que se utiliza para analizar la situación política en otros países. Ni hablar en el propio caso argentino.

La información en el centro de la guerra

La estrategia parte de la desinformación, que en este caso se caracteriza por una saturación del tema “Venezuela”, mientras se ocultan informaciones esenciales para comprenderlo.

Entre lo que se oculta, un lugar destacado lo ocupa el propio pueblo que simpatiza con el chavismo. En la narrativa oficial, se da por

hecho que la totalidad de los venezolanos y las venezolanas adversan al gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, también se ocultan las acciones de violencia realizadas por opositores, al punto de que todos los asesinatos -incluidos los de agentes policiales por parte de manifestantes- son cargados a la cuenta del gobierno bolivariano.

En el plano de la saturación, la denominada crisis humanitaria se emplea de modo de presentar una situación al borde del colapso, como si se viviera en una guerra. A cada momento, en los medios pueden encontrarse “informes especiales” sobre la migración de personas venezolanas, la situación en la que vivían o en la que viven, etcétera. En cambio, no tienen lugar en los medios o en las declaraciones diplomáticas la situación en Colombia, donde se desarrolla un sistemático plan de asesinatos a opositores; la de Honduras, donde el presidente fue electo dos veces con fraude electoral, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno libremente electo de Mel Zelaya; o la de Haití, en situación crítica de hambre, crisis sanitaria y represión desde hace años. Pareciera que ciertos medios, periodistas y dirigentes políticos se preocupan por las crisis humanitarias solo en el caso de Venezuela.

El colmo del cinismo llega cuando ejércitos de tuiteros (los “trolls” oficialistas), supuestamente escandalizados, comparten imágenes de personas en Venezuela buscando comida en los botes de la basura, como si no pudieran encontrarse en casi todas las ciudades argentinas, empezando por Buenos Aires -la más

Fernando Vicente Prieto, periodista y analista de política internacional. Entre 2012 y 2015, trabajó en Venezuela como corresponsal para varios medios internacionales.

rica del país, pero que tiene más de 7 mil personas viviendo en la calle- o las del conurbano bonaerense, golpeadas por la creciente miseria y desigualdad.

Libertad de prensa y división de poderes

En su afán por instalar la idea de que Venezuela vive una dictadura, se afirma y se repite que en este país no hay libertad de prensa. Pero cualquier persona que haga un recorrido por los canales de televisión, el dial de las radios o los puestos de diarios del país caribeño, podrá comprobar que la mayoría de los medios son claramente opositores, incluso con posiciones abiertamente golpistas.

En el caso argentino, es paradójico que quienes “denuncian” la falta de libertad de prensa en Venezuela son los principales impulsores de la concentración de medios y el recorte de voces opositoras.

Apenas asumió Macri como presidente, destrozó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por una amplia mayoría en las cámaras legislativas en 2009. Esta ley, además de representar un avance para combatir los oligopolios y para impulsar el pluralismo informativo y la diversidad cultural, fue la norma más ampliamente debatida de la historia argentina. Durante meses, se realizaron asambleas donde todos los medios, periodistas e instituciones de interés público pudieron tomar la palabra para realizar aportes al debate. Al gobierno de Macri no le importó la institucionalidad democrática y la búsqueda de consensos al momento de modificarla a través de decretos.

El trabajo a favor de la concentración de medios luego se complementó con el pago de un mayor porcentaje de pauta oficial para la prensa y los periodistas aliados y el año pasado, con la sanción de una norma que habilita a Clarín -el principal grupo de medios que defiende al gobierno- ingresar al negocio de la telefonía.

A su vez, el gobierno también permite que este grupo empresario censure el ingreso a los servicios de cable de dos canales comunitarios, Barricada TV y Pares TV, que concursaron por la señal. El poder de este grupo económico es tal que no sólo incumple la ley en el punto mencionado, sino que en el caso de Barricada TV, durante años le ocupó ilegalmente su frecuencia con una repetidora de canal 13, su señal de televisión abierta.

Del “periodismo de guerra” que ejerció Clarín en el ciclo político anterior -según confesó quien fuera su editor, Julio Blanck- se pasó como por arte de magia a la “guerra contra el periodismo”, desatada por el gobierno de Macri apenas asumió. El resultado es impactante: en tres años, cerraron la mayoría de los medios opositores, se despidieron a cientos de periodistas y se atacó a toda voz disidente que pudiera instalar otros puntos de vista. Un momento destacado fue la persecución a los trabajadores y las trabajadoras de la agencia estatal Télam, quienes en 2018 sostuvieron un paro y ocupación del edificio durante varios meses, ante el despido del 80% del personal. Finalmente, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la medida, por la ilegalidad de los despidos y por la magnitud del proceso de lucha llevado adelante.

Nos preguntamos cómo serían divulgadas estas situaciones si, en lugar de ocurrir en Argentina, pasaran en Venezuela.

¿Una justicia independiente?

De idéntica factura es la hipocresía en relación a la situación de la administración de justicia. Mientras los medios y funcionarios argentinos se refieren a las decisiones del Poder Judicial de Venezuela como si fueran del Poder Ejecutivo -asimilando uno a otro, para deslegitimar a ambos- llamativamente se olvidan de analizar los vínculos y las afinidades que existen entre el gobierno, los medios y altos cargos del poder judicial en Argentina.

Entre ellos, el propio presidente de la Cor-

te Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien ingresó al máximo Tribunal de Justicia del país luego de la asunción de Macri. En su hoja curricular contaba con una ventaja: haber sido abogado de varias grandes corporaciones, entre ellas el Grupo Clarín. Precisamente en el marco del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Rosenkrantz conformó una ONG “en defensa de la competencia” cuya principal actuación fue hacer lobby para el grupo empresario.

Por estos días, además, el Poder Judicial ha vivido varios episodios políticos importantes, sistemáticamente ocultados por los medios oficialistas. El primero de ellos tiene que ver con la utilización falsa de nombres de personas como aportantes a las campañas electorales de Macri presidente y de María Eugenia Vidal gobernadora de la provincia de Buenos Aires en 2015. El caso, vinculado al lavado de dinero y al financiamiento ilegal de las campañas electorales, involucró la identidad de personas de bajos ingresos, que perciben una asistencia del Estado. Recientemente, distintas maniobras judiciales contribuyeron a sacarle la causa al juez que la estaba investigando, para pasarla a un juez más cercano.

El último gran escándalo que sacude a la justicia es la revelación de un empresario que involucra en una denuncia por extorsión y corrupción a uno de los fiscales más nombrados del país, Carlos Stornelli. En la causa también aparecen vinculados periodistas y servicios de inteligencia. A pesar de que la denuncia vino acompañada por una gran cantidad de pruebas documentales, dirigentes y medios de comunicación oficialistas salieron a defender al fiscal Stornelli, ficha clave en la persecución

judicial a opositores desde 2016. Uno de los blancos predilectos del *lawfare* en curso en el país es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más aún en el contexto de que varias encuestas preelectorales la señalan con posibilidades de triunfar en las próximas elecciones. Precisamente, el escándalo que rodea a Stornelli evidencia el grado de corrupción de quienes -en teoría- investigan y juzgan la corrupción.

¿Qué pasaría en tu país si la oposición se comportara como en Venezuela?

Por último, cabe señalar la enorme doble vara usada respecto al carácter de las protestas opositoras. Precisamente por la acción interesada de los medios, la mayoría de la población de otros países desconoce el grado de violencia empleado por la oposición venezolana. Sin embargo, este desconocimiento no puede hacerse extensible a personas que cuentan con acceso a la información y que lo ocultan deliberadamente.

El procedimiento es presentar a la oposición venezolana como pacífica y democrática, para justificar su apoyo a los intentos de Golpe de Estado. ¿Pero qué sucedería, por ejemplo en Argentina, si la oposición convocara a manifestarse “hasta que caiga el gobierno” y lo hiciera destrozando edificios públicos y asesinando a integrantes de fuerzas de seguridad?

La respuesta no le sorprenderá, pero si la compara con la vara usada para los países “hostiles” a USA, le obligará a preguntarse dónde se perdió la coherencia. ☹

Ecuador: ¿Hay derecho moral a criticar a Venezuela?

Omar Ospina García

Ya no es aparente sino real la derechización de la política latinoamericana. Los casos de Argentina, Chile, Brasil y Colombia son evidentes y no es necesario repetir lo que medios independientes han denunciado repetidas veces: su alineación con la Casa Blanca y su pertenencia sin escrúpulos al Cartel de Lima.

Pero veamos el caso ecuatoriano analizando uno a uno los principales “delitos” que, según el “nuevo” gobierno, comete el de Venezuela.

1.- Falta de Democracia. Este punto acaba de ser anulado por el Presidente Moreno al “delegar” sus funciones, Decreto 660, en 4 amanuenses a los que nadie eligió para gobernar, y que tendrán en adelante el ejercicio de las funciones presidenciales ante el paso al costado -abandono del cargo- por parte del Titular de la Presidencia.

A lo anterior se agrega la acusación sin pruebas de delitos inexistentes contra el Vicepresidente Jorge Glass, y su apresamiento sin juicio legal para alejarlo de la Presidencia por “Correísta”; el desconocimiento del Consejo de Participación Ciudadana, sin la intervención de la Asamblea como manda la Constitución, y nombramiento a dedo de remplazos “provisionales” que se han convertido en definitivos; la actuación de tal Consejo ante situaciones políticas en las que su Presidente Julio

Cesar Trujillo, anciano miembro de la vieja partidocracia, ha dicho y demostrado que la Constitución le vale un comino y que en el país rige su voluntad omnímoda; el nombramiento anticonstitucional, designado a dedo por el Gobierno y sus “consejeros” y no elegido por la Asamblea, de un nuevo Vicepresidente, tercero en el mandato actual.

Con tales muestras “democráticas” del gobierno Moreno puertas adentro, y su alineación con Washington y el Grupo de Lima, “exigir” al gobierno venezolano “elecciones libres e inmediatas” ya deja de ser excesiva muestra de cinismo político para convertirse en ridículo continental. Pero hacer el ridículo no ha sido precisamente su preocupación personal. Ni siquiera por recato presidencial.

2.- Elecciones limpias. Epítome de suciedad electoral fue la Consulta Popular de abril de año anterior, írrita no solo porque dos de las preguntas fueron evidente y cuestionable anzuelo para conseguir la aprobación popular acudiendo a las emociones que suscitan temas como el abuso sexual contra la niñez y la protección de la naturaleza, sino por la índole anticonstitucional de la Consulta misma, cuyas preguntas no fueron aprobadas y ni siquiera sometidas a estudio por parte de la Corte Constitucional. La oficina jurídica de la OEA, en declaración reciente, calificó la consulta de improcedente por su origen espurio e inconsulta.

Omar Ospina García, periodista colombiano/ecuatoriano independiente.

3.- *Legitimidad.* En la Campaña electoral el Candidato Moreno ofreció **continuidad** en el Proyecto Político que lo llevó al triunfo en las dos jornadas electorales. No obstante, tomó distancias de su antecesor en la misma semana del triunfo, y desde entonces se ha dedicado a desmontar todo el Proyecto que lo puso en la Presidencia, para asumir y reforzar el programa de la derecha perdedora en las elecciones. Eso es cualquier cosa menos legitimidad política. Ni ética.

4.- *Respeto a los DD HH.* No es la asignatura en la que el gobierno pueda mostrar algún progreso y sí, más bien, inocultables retrocesos. Ya no hay, desde luego, confrontación del Presidente con los medios de comunicación por su falta de ética, objetividad e imparcialidad, al parecer los únicos derechos humanos que interesan a la que Atilio Boron llama La Canalla Mediática. Pero cuentan la desaparición de personas, que ha vuelto a tener dolorosa presencia en el país; la eliminación paulatina de las Escuelas del Milenio y la reaparición de unidocentes sin condiciones favorables a la educación de la niñez rural; los feminicidios (y no solo femicidios), más de una docena en los últimos dos años, denunciados por organizaciones de mujeres; la represión latente o real de las FF AA y de policía contra manifestantes, impidiéndoles acercarse siquiera a las inmediaciones del Palacio de Gobierno, meta obvia de una manifestación contra medidas gubernamentales; todo ello indica que en Derechos Humanos el gobierno de Lenin Moreno pierde el año desde hace rato.

5.- *Tolerancia.* Si la tolerancia se mide por la aceptación del otro, contrincante o adversario, no ha sido esa virtud favorita del gobierno Moreno. Su odio al antecesor y mentor político, derivado de que se sabe inferior en ca-

pacidades administrativas y ejecutorias políticas y, sobre todo, por la enorme diferencia de prestigio internacional que poseen uno y otro, hace que también sea la tolerancia materia deficitaria en el actual mandatario.

6.- *Corrupción.* Esta es quizá la mayor de las pruebas en las cuales el gobierno Moreno, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, ha venido cayendo en las profundas simas de la corrupción sobre la cual no ha escatimado críticas ni señalamientos sin prueba alguna contra su antecesor.

Degradar las más importantes obras públicas por falta de mantenimiento y mediante acusaciones de sobreprecios y construcción deficiente no comprobada en ninguna de las obras importantes, que funcionan de manera eficiente a pesar de la campaña sucia mediática, no solo para denigrar al gobierno anterior sino para devaluarlas y venderlas a la empresa privada, ya es signo evidente de corrupción por parte de algunos de los más altos funcionarios del gobierno, amigos y socios del empresariado nacional que no ha invertido en ellas un centavo. Todo ello muestra cotas de corrupción que manchan de manera indeleble la página de exámenes éticos del Gobierno ecuatoriano actual.

No hay duda de que el Gobierno del Ecuador, al asumir y aceptar sin condiciones las imposiciones de la Casa Blanca frente a Venezuela, no solo se ha convertido en uno más de los peones del imperio, sino que viene haciendo méritos suficientes para ser aceptado como socio del Cartel de Lima. Con lo cual pasaría a la historia de la traición a un proyecto político eminentemente popular, para sumarse sin reservas ni dignidad a la fila de los gobiernos del Patio Trasero. ☹

Chile: un sistema inhumano

ALAI

//El modelo chileno, que es presentado en el extranjero como el mayor éxito del neoliberalismo, presenta una realidad muy diferente para millones de familias chilenas”, según señaló Tomás Hirsch, Diputado del Partido Humanista chileno (bancada del Frente Amplio), en entrevista con ALAI. Ello se expresa en la creciente brecha del ingreso y concentración de la riqueza, y el endeudamiento asfixiante en que se hunde la mayoría de trabajadores. De hecho, “todos los indicadores nos ubican como uno de los países más desiguales de la OCDE, con peores índices de educación, salud, pensiones, calidad de vivienda, áreas verdes por habitante...”, añade. Este “sistema profundamente inhumano” no prioriza la calidad de vida. A continuación, el intercambio sobre las orientaciones de la política del gobierno chileno, que cuestionan su calidad moral para criticar a Venezuela.

- *Diputado, es notoria la crítica del presidente Sebastián Piñera hacia el gobierno constitucional de Nicolás Maduro en Venezuela, en el marco del ataque que sostienen el grupo de Lima y la OEA contra la Revolución Bolivariana. Nos gustaría pasar revista a algunos aspectos en su propio país para verificar la coherencia en la actitud del gobierno chileno.*

La postura del presidente Piñera es de una incoherencia que linda con el surrealismo político. Chile debe ser el único país del mundo que 29 años después de terminar la dictadura, sigue teniendo una Constitución generada en dictadura, redactada por un pequeño grupo de hombres de extrema derecha sin debate alguno, “votada” sin registros electorales, diseñada para perpetuar un sistema profundamente antidemocrático. Salvo pequeños retoques,

sigue siendo la misma que mantuvo en el poder al dictador Augusto Pinochet. Por casi 20 años tuvimos senadores designados a dedo y un sistema electoral totalmente amañado. Y ¿desde acá se pretenden dar lecciones de democracia?

Chile, mientras se vanagloria internacionalmente por su supuesto éxito económico, tiene una de las peores distribuciones de ingreso del planeta, con un salario mínimo vergonzoso que no alcanza para la subsistencia del millón de trabajadores que lo recibe. Y ¿se pretende dar lecciones de derechos sociales desde acá? El sistema de pensiones chileno, también creado en dictadura y mantenido por el poder del empresariado sobre el mundo político entrega pensiones miserables, cercanas al 25% del sueldo recibido al momento de jubilar. Es una verdadera violación a los derechos humanos de los adultos mayores. A su vez, la salud y la educación son negocios y no derechos, definidos por el mismo presidente como bienes de consumo.

Chile es el único país del mundo en el que el agua es 100% privada. Los recursos pesqueros fueron entregados en el primer gobierno de Piñera a **perpetuidad** a 7 familias, mediante una Ley que fue públicamente reconocida como corrupta, aprobada con el cohecho a ministros y parlamentarios. El cobre, el litio, los bosques, la energía, todo, absolutamente todo ha sido desnacionalizado y entregado a multinacionales, que por supuesto hablan muy bien de nuestro país...

La policía, Carabineros de Chile, está siendo investigada por el mayor robo de la historia de nuestro país. Y mientras tanto, esos mismos carabineros siguen asesinando a los mapuche.

¿Desde este país se pretenden dar lecciones

de democracia, justicia, derechos humanos, igualdad social? Da vergüenza siquiera sugerirlo.

- *Se tilda a Venezuela de “dictadura” y a su gobierno de represivo. Esto es particularmente delicado en un país como Chile que sufrió un golpe de Estado virulento contra un presidente electo por el pueblo y una cruenta dictadura militar durante diecisiete años. Háblenos de la postura del actual gobierno en relación a ese período nefasto y sobre el estado actual de la democracia en Chile.*

Lamentablemente nos enfrentamos a un “revival” de la valoración de la dictadura y de Pinochet. Sin ir más lejos, hoy mismo (13 febrero) uno de los principales senadores del gobierno se declaró Piñerista-pinochetista. Se ha instalado un intento de negacionismo de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Piñera pretendió instalar como ministro de Cultura a un declarado negacionista. No hay que olvidar que, además, para su elección Piñera fue apoyado, con su personal agradecimiento, por el “Bolsonaro” chileno, José Antonio Kast, populista neofascista que cuenta con el apoyo creciente de los parlamentarios de gobierno. En Chile, de acuerdo a todos los informes internacionales, se sigue torturando, se asesina a mapuche y dirigentes sociales y ambientales. Y el manto de impunidad ha significado que ninguno de los responsables termine en la cárcel. Y los mismos violadores de derechos humanos condenados, gozan de instalaciones de lujo en el penal 5 estrella de Punta Peuco. Es muy lamentable decirlo, pero en el último año hemos visto un gobierno que vira con fuerza hacia la derecha dura.

- *Se suele denunciar desde el gobierno chileno supuestas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hemos asistido al reciente asesinato a sangre fría de Camilo Catrillanca -una de muchas víctimas- y son lamentablemente frecuentes las referencias a la discriminación del pueblo mapuche, la represión y militarización en su territorio ancestral. ¿Cree Ud. que el*

Estado chileno y en particular el gobierno Piñera respeta y defiende vigorosamente los derechos humanos?

Durante los últimos años, no solo en este gobierno sino que también en los de la ex Concertación, se han violado reiteradamente los derechos humanos y así lo ha expresado en reiteradas oportunidades la Comisión Interamericana de DDHH y otros organismos internacionales de DDHH. Se ha asesinado mapuche a sangre fría. A niños mapuche incluso se los ha atacado con bombas lacrimógenas en sus escuelas y se les ha disparado a quemarropa. Y a los criminales, siempre miembros de la policía de Carabineros, no les ha pasado nada; a lo más condenas con penas nominales absurdas. A su vez, cientos de niños, niñas y adolescentes vulnerables han muerto en los últimos 12 años mientras están al cuidado del Estado en el Sename (Servicio Nacional de Menores). Y últimamente, hemos asistido a ataques reiterados contra diferentes sitios de memoria correspondientes a los lugares en que la dictadura torturó y asesinó, y el gobierno deja hacer y mira para el lado. Sí, podemos decir enfáticamente, aunque con dolor, que en Chile se violan los derechos humanos.

- *Otro aspecto que suele criticarse como uno de los grandes problemas de Venezuela, es la corrupción en las filas de gobierno. Hábleme de la ética política gobernante en Chile.*

La mejor forma de responder esta pregunta es con un par de ejemplos que todo Chile conoce al detalle:

La Ley de pesca, promulgada por Piñera en su primer gobierno, es considerada un ejemplo casi perfecto de lo que es la corrupción y el cohecho. Decenas de diputados y senadores sobornados, ministros y subsecretarios que recibieron millones de dólares, párrafos completos de la Ley redactados por las grandes pesqueras y enviados por mail al gobierno. Todo lo anterior comprobado por la justicia. ¿Resultado? La Ley sigue vigente bajo el pretexto de que en Chile no se puede

anular una Ley.

SQM, la más grande productora de Litio del mundo, fue regalada por Pinochet a su yerno, Julio Ponce Lerou. Durante los últimos 10 años, éste se dedicó a comprar a parlamentarios de todos los partidos políticos del duopolio. Todos los casos están documentados, los empresarios confesaron y los parlamentarios reconocieron haber recibido los aportes. ¿Resultado? Todos llegaron a “acuerdos” con la justicia y ninguno fue condenado.

Hace solo dos días, se develó cómo Piñera, en su primer período, hizo gestiones (exitosas) para obtener una playa privada frente a una de sus muchas casas en los lagos del sur de Chile. Es una pequeña muestra de lo que se devela cada día en nuestro país: que la corrupción y sobre todo el abuso de poder han estado instalados en la política chilena.

- *La principal motivación de los gobiernos de EEUU y Europa, que impulsan y avalan el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro, es la enorme riqueza de recursos naturales de Venezuela, hoy manejados por el Estado. Chile también es un país rico en este sentido. Cuéntenos acerca de quiénes se benefician de los recursos naturales en su país.*

En Chile los recursos naturales hace mucho tiempo que dejaron de pertenecer a los chilenos. El cobre, en su momento nacionalizado por Allende con el apoyo unánime del Congreso Nacional, hoy pertenece en un 80% a multinacionales. El litio, una riqueza estratégica, a 2 grupos económicos, los recursos pesqueros fueron entregados a 7 familias, el agua está privatizada en un caso único a nivel mundial, la energía es manejada en su totalidad por grupos multinacionales. Y aparte de eso, las pensiones las manejan cuatro grupos extranjeros. El país entero está en manos privadas.

- *La política exterior de Chile pareciera no tener sustento propio y estar automáticamente alineada con los designios de EEUU. ¿Cuál es la razón, en su opinión?*

Hay una foto vergonzosa que circuló en las redes sociales hace un tiempo. Durante la visita que hizo a EEUU, al reunirse con el presidente Trump, el presidente Piñera le mostró una bandera norteamericana que en su interior contenía una minúscula bandera chilena. Ver la imagen reproducida en el mundo entero fue una vergüenza nacional pero al mismo tiempo una comprobación de hasta qué punto este gobierno, sin dignidad alguna, se alinea con el gobierno y las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Lo mismo sucede a la hora de firmar tratados internacionales, en los que Chile ha aceptado condiciones absolutamente desfavorables para el pequeño y mediano empresariado nacional. Detrás de esta actitud servil, claramente hay intereses económicos operando. La derecha política y empresarial chilena están profundamente vinculados con intereses norteamericanos y el mismo presidente forma parte de esa vinculación.

- *¿Le parece que los permanentes ataques de los gobiernos de derecha contra Venezuela son un modo de desviar la atención de los problemas que afectan a sus países? Además de lo ya comentado, ¿qué habría que cambiar en Chile?*

Chile requiere avanzar desde la actual democracia “formal” hacia una verdadera democracia, con participación social efectiva. Para eso, lo primero es darnos una nueva Constitución generada a través de una Asamblea Constituyente. Por otra parte necesitamos avanzar en forma acelerada hacia un Estado que garantice los derechos sociales fundamentales. Recuperar nuestros recursos estratégicos es otra de las tareas urgentes que tenemos. En el plano internacional, integrarnos con Latinoamérica en forma constructiva, aportando al fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia en la región.

Chile debe dejar de pretender ser lo que no es. Debe dejar de dar “lecciones” a otros países y debe concentrarse en resolver los múltiples y enormes problemas sociales que tenemos acá. ☹

El gobierno paraguayo contra el proceso bolivariano

Hugo Ruiz Díaz Babuena

El actual gobierno paraguayo, con fuertes rasgos fascistas, fue resultado de un proceso de fraude que culminó con las elecciones de 2018. El presidente resultado de un fraude electoral es ferviente reivindicador de los crímenes cometidos durante la dictadura empresarial-militar de Alfredo Stroessner.

El actual presidente, Abdo Benítez, es el hijo de uno de los principales responsables de crímenes de lesa humanidad, cuyo nombre familiar porta en forma íntegra. Fue el 10 de enero de 2019 que el Estado paraguayo, a través del gobierno en plaza, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Cuenta con uno de los gobiernos y una oligarquía que, probablemente, sean los más sometidos a los intereses norteamericanos y los más férreos defensores del proyecto de recuperación del “patio trasero”.

Paraguay carece de peso en las relaciones internacionales, sin autonomía ni independencia en política exterior; carece de los medios económicos, financieros, políticos, diplomáticos y militares para la implementación de la furiosa campaña desatada contra la República Bolivariana de Venezuela.

Por tanto, su rol debe ser aprehendido y analizado desde esta realidad, sin subestimar, sin

Hugo Ruiz Díaz Balbuena es abogado, especialista en Derecho Internacional.

embargo, el daño que puede producir, dentro de un colectivo, a los procesos de cambio en la región. Es, pues, en el contexto de la ofensiva colectiva de la derecha, extrema derecha y la derecha fascista contra Venezuela que se impone el análisis de la conducta del Estado paraguayo.

Reagrupamiento de la derecha y ofensiva en el MERCOSUR

Desde el golpe de Estado de 2012 contra el gobierno de Fernando Lugo, la dirección de la política exterior paraguaya tuvo un giro notable. El Estado paraguayo se convirtió en un portaaviones en la subregión, parte de una ofensiva político-ideológico-diplomático-económico-social contra movimientos políticos y partidos progresistas y de izquierda.

El giro en la política exterior se materializó primeramente como punta de lanza en el reagrupamiento de las fuerzas de la derecha regional y subregional, ya como parte del proyecto imperialista norteamericano de aniquilamiento de todo tipo de proceso que considere como contrario a sus intereses.

Apenas la relación de fuerzas tuvo una variación favorable en la región mercosuriana, con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil y la victoria de Macri en Argentina, desde el gobierno de Horacio Cartes primero, Paraguay comienza a participar en forma más directa en la campaña internacional contra

el Estado de la República Bolivariana de Venezuela; en particular, contra el proceso de cambio social. Y específicamente contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta política desplegada en el plano internacional se profundiza con el actual gobierno.

Importante aquí es traer a colación la coordinación entre Macri, Cartes y Temer, con vistas a excluir al Estado de la República Bolivariana de Venezuela del MERCOSUR. Hecho consumado *de facto*, en violación más que flagrante de las normas fundamentales que regulan las relaciones entre los Estados miembros. El Estado de la República Bolivariana de Venezuela quedó ilícitamente excluido del bloque bajo figura de suspensión, jurídicamente infundada, arbitraria.

El Estado bolivariano era, de toda evidencia, un obstáculo para los proyectos norteamericanos de recuperación de su dominio y control en la región y barrera para el reagrupamiento de la derecha subregional, limitando con su participación en el MERCOSUR, los proyectos de desestructuración de procesos de integración, incluyendo lógicamente, la liquidación del MERCOSUR. Efectivamente, el proyecto de desestructuración del MERCOSUR, frente a un más que dubitativo gobierno del Frente Amplio en Uruguay, se consumó dando paso al aniquilamiento del que fuera bloque mercosuriano. Se puede afirmar que el desmantelamiento del MERCOSUR como bloque es una tarea cumplida, sobre todo después de la exclusión de la República Bolivariana de Venezuela.

Bajo control directo del régimen norteamericano

Terminado o casi terminado el objetivo de exclusión del Estado bolivariano, el gobierno paraguayo prolonga su presencia, ya en medio de una marea de la derecha internacional en la Organización de Estados Americanos (OEA), más conocida como “Ministerio de Colonias”. Este paso constituye una articulación cualitativa de la derecha regional y una coordinación

institucionalizada desde donde, interpretando normas jurídicas en forma arbitraria, se pretende arrastrar a los otros miembros para incluso justificar y legitimar crímenes internacionales. Fue bajo el gobierno de Cartes que comenzó la demolición de la UNASUR y el vaciamiento de la CELAC.

Como continuidad de la política de Cartes, el actual gobierno de Mario Abdo Benítez, con el conjunto de Estados subordinados a Estados Unidos, estuvo activamente a favor de la exclusión del organismo bajo pretexto de la aplicación de la Carta Democrática. Manifestó el apoyo incondicional a las sanciones unilaterales económicas norteamericanas constitutivas del crimen internacional de agresión, entre otros graves actos. De ese modo el gobierno paraguayo toma parte activa en la cruzada internacional para la liquidación de un proceso de cambio social, insertándose en la internacional de la derecha y del fascismo.

Bajo el paraguas de Washington

Creado en 2017, compuesto por gobiernos de tinte abiertamente neofascistas, hasta genocidas -como el de Iván Duque-, es bajo este paraguas, a su vez bajo directa tutela norteamericana, que el gobierno paraguayo actual participa más activamente en la ofensiva contra la República Bolivariana de Venezuela. Una ofensiva que, con las sanciones económicas, políticas, diplomáticas y otras, va tomando un carácter de genocidio.

De la misma manera que participó activamente para que la OEA desconozca al gobierno de Nicolás Maduro, actuó para que se reconozca como gobierno legítimo de Venezuela al que fuera designado por Estados Unidos como “presidente encargado”: Guaidó.

La participación del Estado paraguayo contra la República Bolivariana de Venezuela, es también canalizada a través del grupo *de facto* conocido como Grupo de Lima, el cual actúa fuera de todo marco jurídico internacional y

contra las reglas fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados.

Una política exterior irresponsable

Como señalamos al inicio, la ruptura de relaciones diplomáticas fue anunciada oficialmente el 10 de enero de 2019. Semanas después, reconocen al “embajador” fantoche designado por el autoproclamado Guaidó y establecen “relaciones diplomáticas” personales con un personaje designado por Washington.

Esta política timorata, además de contribuir a la desestabilización de toda la región, pone en peligro la paz y la seguridad regional. Además, en forma absolutamente irresponsable, importa e impone a la ciudadanía paraguaya un conflicto externo, mientras más de un millón de paraguayos están pasando hambre y hasta mueren de hambre, y mientras que ni siquiera existen hospitales ni política pública de salud y millones de ciudadanos deben men-

digar hasta gasa esterilizada.

A pesar del terrorismo mediático desplegado por el gobierno con la participación directa del monopolio privado de la comunicación, la solidaridad de movimientos sociales, intelectuales, partidos progresistas y de izquierda con el gobierno de Nicolás Maduro y con la República Bolivariana de Venezuela se hace sentir y participan activamente en la lucha contra-hegemónica.

El gobierno fascista paraguayo se juega en la crisis venezolana, la vida o la muerte. Ciertamente, el fracaso de la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro abrirá una crisis social y política, adelantando la crisis del régimen oligárquico, prolongación del Golpe de Estado de 2012. El fracaso del imperialismo será el hundimiento de todos los gobiernos satélites, entre ellos, del gobierno paraguayo. Se perfila, pues, a pesar de la difícil coyuntura, una victoria de los pueblos. ☞

<https://integracion-lac.info>



Un ojo ciego y una mano dura

La OEA y la democracia

Laura Carlsen

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se creó en 1947-48, pero sus raíces son más antiguas por los esfuerzos de integración regional desde finales del siglo XIX. Al igual que otras organizaciones multilaterales, los dirigentes apoyaron a la organización regional para que pudiera actuar como contrapeso para contener los conflictos internos y como fuerza unificadora para protegerse de las amenazas externas.

Pero la realidad del poder, la hegemonía y los intereses económicos de Estados Unidos en la región han carcomido la misión multilateral de la OEA, desde sus orígenes. De una crisis política a otra, la dirección ha seguido las órdenes de Washington, haciéndose de la vista gorda ante las violaciones a su Carta respaldadas por EEUU, al tiempo que aplica mano dura contra las naciones que desafían los intereses del gobierno de Washington. Esto ha sido especialmente cierto bajo el actual liderazgo del uruguayo Luis Almagro. El intento de instalar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela es el último ejemplo, pero el patrón sesgado de la OEA de apoyar fraudes electorales de la derecha mientras opera estrategias de cambio de régimen diseñadas por EEUU contra gobiernos de izquierda, ha dejado una estela sangrienta de malestar social, migración forzada y autoritarismo en todo el continente.

Una trayectoria para socavar la democracia

Cuando Juan Guaidó se declaró presidente de Venezuela en un mitin de calle, el Secretario General de la OEA lo felicitó inmediatamente.

Laura Carlsen, politóloga y periodista mexicana/estadounidense, es Directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México.

te y trató de cerrar los canales diplomáticos para resolver la crisis política. Sabiendo que no podía obtener suficiente apoyo en una votación de la Asamblea General, Almagro anunció su apoyo personal a Guaidó. Posteriormente obtuvo el reconocimiento de un subgrupo de naciones conocido como el Grupo de Lima, con la importante excepción de México.

Este uso altamente personal del cargo de Secretario General suscitó protestas de las naciones de la Caricom, cuyo líder Timothy Hams le escribió para expresar “nuestra desaprobación y grave preocupación con respecto a la postura que usted como secretario general ha adoptado al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Consideramos esta acción inapropiada por su parte, al no tener la autorización de los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos”¹.

Almagro, quien asumió el cargo en 2015, ha sido uno de los líderes más agresivos de la OEA en la representación de los intereses de EEUU, en cuyo transcurso ha violado a menudo la Carta de la OEA. Pero la perversa violación del compromiso de la organización con la democracia *a nombre de la democracia* no es nueva.

En Haití, la OEA ha manipulado y socavado sistemáticamente las elecciones a instancias del gobierno de Washington. En 2010, [apoyó la imposición de Michel Martelly](#), proporcionando un barniz para la injerencia abierta de EEUU en las elecciones después del devastador terremoto del 12 de enero. En 2015, la OEA certificó una elección fraudulenta y violenta. La complicidad de la OEA con el plan de EEUU de impedir que los haitianos decidan el futuro de Haití es

¹ <https://bit.ly/2TUy6X3>

un factor importante en las actuales protestas contra el presidente Jovenel Moïse, que han llevado a una situación de violencia, escasez e inestabilidad aparentemente permanente.

En Honduras, las acciones de la OEA terminaron por eliminar cualquier esperanza de que pudiera desempeñar el papel de árbitro imparcial. Durante el golpe de Estado de 2009, la organización protestó inicialmente por la destitución militar del presidente constitucional, pero no logró restaurar el orden democrático, a pesar del amplio consenso entre los Estados miembros. Desde entonces, Honduras ha pasado de una crisis a otra. La nación ha sufrido escándalos de corrupción en los regímenes posteriores al golpe, el estado de derecho se ha deteriorado y la violencia estatal y criminal se ha disparado, a menudo combinadas.

En las elecciones de noviembre de 2017, el presidente Juan Orlando Hernández se postuló nuevamente, a pesar de que la constitución hondureña prohíbe explícitamente la reelección, y aparentemente perdió. El gobierno suspendió el conteo de votos y se reinstaló con un cambio de las tendencias que le dio la victoria a Hernández. Con el apoyo de la Embajada de EEUU, Hernández asumió el cargo en medio de protestas generalizadas. La OEA titubeó, negándose primero a [validar las elecciones](#), citando “irregularidades, errores y problemas sistemáticos”² en el proceso electoral. Sin embargo, finalmente no sólo aceptó a Hernández, sino que tomó medidas para proteger a su gobierno de acusaciones de corrupción y abuso. La oposición acusó a la organización de apoyar la posición de EEUU para mantenerlo en el poder. El contraste entre el apoyo al fraude electoral en Honduras y el intento de derrocamiento del gobierno electo en Venezuela con el pretexto de supuestas irregularidades electorales revela una vez más el sesgo derechista y no pro-democrático de la OEA.

La represión gubernamental de las manifestaciones postelectorales ha dado lugar a múltiples asesinatos de manifestantes de la oposición. Almagro ha contribuido además al fracaso de

las instituciones democráticas en Honduras al [obstruir las investigaciones anticorrupción](#) llevadas a cabo por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Neutralizada por luchas internas, la falta de fondos y el papel de apoyo de Almagro a la política de EEUU, la MACCIH se ha visto reducida a desactivar en lugar de promover las demandas populares contra la corrupción.

La crisis política hondureña ha obligado a miles de personas a huir y buscar refugio en EEUU, donde muchos tienen familia. La violencia y el éxodo masivo del país son síntomas de esta situación. Mientras las familias hondureñas enfrentan la criminalización e incluso la muerte en el trayecto migratorio, los expertos coinciden en que la única manera de detener el desplazamiento forzado es abordar “las causas profundas de la migración”. Almagro y la OEA han jugado un papel importante en generar estas causas, a la vez que han guardado silencio sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte del gobierno de EEUU.

La participación antidemocrática de la OEA en los asuntos internos de las naciones americanas no se detendrá en Venezuela. Los planes de Almagro y Trump para el cambio de régimen en el continente colocan a Cuba como siguiente en la lista. El especialista estadounidense en el derrocamiento violento de gobiernos populares, Elliott Abrams, elogió recientemente a Almagro en un artículo del Consejo de Relaciones Exteriores en que llamó a “poner fin a la revolución” en Cuba³. Abrams es ahora el Enviado Especial de Trump a Venezuela.

La convergencia del regreso de los halcones más sangrientos de Washington, del ascenso del neofascismo y de una OEA que ha perdido toda pretensión de independencia proyecta una peligrosa sombra sobre la región. Si la democracia ha de sobrevivir, las naciones tendrán que volver a las definiciones esenciales y rechazar los programas ideológicos de “promoción de la democracia” que pervierten en lugar de promover la autodeterminación y el gobierno de los pueblos. (Traducción ALAI) ☞

2 <https://bit.ly/2TZfrcM>

3 <https://on.cfr.org/2Injiih>

La democracia hondureña, espejo de Donald Trump para Venezuela

Javier Suazo

Los países latinoamericanos que avalaron el golpe de Estado contra Venezuela y su presidente, reclaman nuevos comicios y la instauración de un gobierno interino, de Juan Guaidó, que sirva a estos propósitos del Imperio. No obstante, sus bases democráticas y morales son de arena, ya que por definición son gobiernos corruptos, ilegítimos y violadores sistemáticos de derechos humanos. Honduras no es la excepción, es la regla a imagen del Imperio.

El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), llegó al poder en 2013, como producto de un fraude electoral; pero, además, fue electo con un 36.89% de los votos por un Tribunal Supremo Electoral (TSE) controlado por el Partido Nacional. Aunque la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial, un dictamen de la Corte Suprema de Justicia interpretó que la reelección en Honduras no está prohibida.

El candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla, se declaró ganador de las elecciones celebradas en noviembre de 2017, ya que aventajaba a JOH por cerca de 94,000 votos; pero en días previos a la declaración final del TSE se anuncia que Honduras es uno de los pocos países de la región

Javier Suazo es economista hondureño, docente de la UNAH y consultor internacional en temas de políticas económicas, reforma del estado y desarrollo local; colaborador de revistas nacionales e internacionales.

latinoamericana que votó a favor para que la capital de Israel sea trasladada a Jerusalén, y es ungido como presidente.

En lo económico, el gobierno de la República destaca los logros obtenidos en materia de estabilidad económica y crecimiento del PIB, medida por una reducción del déficit fiscal de -7.9%/PIB en 2013 a -3.5%/PIB en 2018, lo que se refleja, según el argumento de los llamados monetaristas bastardos, en una baja tasa de inflación de 4.22% en 2018, cuando en 2013 era de 4.92%. Por su parte, el PIB muestra una tasa de crecimiento de 3.6% en 2018, mayor a 2.6% en 2013; sin embargo, omite referirse al sobreendeudamiento que creció exponencialmente después del golpe de Estado. En 2010, la deuda representaba el 29.62%/PIB, hoy el 47.5%/PIB, según cifras del gobierno, las cuales han venido siendo cuestionadas por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) al considerar que la deuda total hace tiempo superó el umbral del 50%/PIB.

En 2010, la tasa de desempleo abierto (TDA) era de 3.9 %/PEA, y a junio de 2018 pasó a de 5.7%/PEA; lo grave es el aumento del subempleo que, según INE, afecta el 62.8% de esta población, existiendo más de 1.9 millones de personas en situación de desempleo invisible (48.6%), o sea personas que tienen ingresos menores del salario mínimo y trabajan más de 36 horas semanales.¹

¹ Ver Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, INE, 2018.

Este creciente desempleo invisible, es el principal factor que explica la situación de pobreza e indigencia de la población hondureña, donde 5,974,410 millones de personas permanecen en condiciones de pobreza, con un aumento de 656,045 personas después del golpe de Estado (FOSDEH. 2018).²

Hay cifras de CEPAL (2014)³ que demuestran que la dependencia alimentaria en arroz (2001-2013) supera el 85%, cubriendo con producción nacional sólo un 15% de la demanda, cuando en el periodo anterior (1990-2000), la dependencia era menor del 50%. Cifras conservadoras estiman que las concesiones mineras abarcan el 31% del territorio nacional, con las consecuentes pérdidas de bosque, biodiversidad, fuentes de agua dulce y vidas humanas.⁴

Más gasto en seguridad, menos en salud y educación


El principal objetivo de JOH es la reducción de la tasa de homicidios. Está disminuyó de 77.45% por cada 100,000 habitantes en 2013, a 40.2% (estimada) por cada 100,000 mil habitantes en 2018, atribuida al desmantelamiento de carteles de la droga, encarcelamiento y posterior extradición de sus principales cabecillas, caso particular de los Valle, Cachiros e incluso de su hermano, Tony Hernández, que está siendo juzgado por tráfico de drogas en EEUU.

La apuesta del gobierno a la militarización del país y represión de la protesta pública ha debilitado sustancialmente la capacidad del Estado por proveer servicios de salud y edu-

cación de calidad a la población. “En salud el gasto disminuyó de 12.8% en 2006 a 11.8% en 2016, y en educación de 28.7% a 20.1%. En contraste, se observa un aumento considerable en el presupuesto de defensa y seguridad, y por el pago de la amortización de la deuda pública. En defensa y seguridad, el gasto aumentó su participación de 7.5% en 2006 a 13.7% en 2016; o sea un aumento de 399%, unos 13,511 millones de lempiras. La amortización de la deuda pública pasó de absorber el 11.6% del gasto bruto total en 2006 a 23.9% en 2016, un aumento de más de 413%, o sea de 23,763 millones de lempiras”.⁵

La corrupción se ha convertido en un mal endémico. El rosario de casos de corrupción no termina. Entre los más sonados destaca el asalto a los fondos del aseguramiento social, manejados y protegidos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde el robo se estima en más de 7 mil millones de dólares, e involucra a funcionarios de gobierno, diputados y empresarios. El presidente Hernández reconoció haber recibido fondos de empresarios ligados al defalco de IHSS para financiar su campaña política que lo llevó al poder en 2014.

El caso “Pandora” involucra a diputados del Congreso de la República con funcionarios de gobierno, donde se desviaron fondos a la ejecución supuesta de proyectos, pero que destinaron a otros fines. Se estima que el monto asciende a más de 11 millones de dólares, recuperándose solo una parte ínfima.

Honduras y el gobierno de JOH sigue fiel al libreto neoliberal y dictados del FMI y la Embajada Americana, al cual se ha sumado la Unión Europea, esperando que el sueño de la tierra prometida se cumpla. (13/02/2019) 

2 Ver “Honduras Ayer y Hoy: El efecto políticas públicas, FOSDEH, 2018.

3 CEPAL “Evolución del Sector Agropecuario en Centroamérica y la República Dominicana, 1990-2013”. Subsede Regional en México, 2014, pág. 122.

4 Ver “El Extractivismo en América Central: Un balance del desarrollo de las Industrias extractivas y sus principales impactos en los países centroamericanos. Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Panamá, 2015.

Ver una versión más extensa de este artículo en: www.alainet.org/es/articulo/198226

5 Ver Javier Suazo “Neoliberalismo Postgolpe”, op cit pág. 43

Contra el proyecto de la emancipación de la Patria Grande

Guatemala en el eje del neo-golpismo

Simona Violetta Yagenova

Todo lo que es revolucionario, lo que enseña, lo que trata de guiar, lleno de luz y de conciencia, de claridad y de belleza, a los hombres y a los pueblos a mejores destinos, hacia más altas cumbres del pensamiento, de la vida y de la justicia, encuentra la reprobación más encarnizada del imperialismo.
Fidel Castro Ruz

El gobierno guatemalteco, encabezado por el presidente Jimmy Morales, (2016-2019), ha modificado sustancialmente su política exterior que durante las últimas décadas se caracterizaba por un respaldo a los procesos de integración, el multilateralismo y respeto a la soberanía y no intervención en los asuntos internos de otros países. Hoy participa activamente en el Grupo de Lima y su política de agresión e intervención contra la República Bolivariana de Venezuela, estrechó su histórica alianza con el Estado terrorista de Israel acatando la orden de trasladar su embajada a Jerusalén en una franca violación al derecho internacional y derecho del pueblo palestino, ha amenazado con la expulsión del cuerpo diplomático de aquellos países quienes han cooperado en materia de derechos humanos

(DDHH) y derechos de los pueblos originarios; ha expulsado del país al Comisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), y a su equipo de trabajo integrado por expertos internacionales, se ha enfrentado directamente al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, violando cualquier norma básica de comportamiento diplomático. Algunos personajes allegados al gobierno libran una guerra discursiva contra las instancias internacionales en materia de DDHH, la ONU y hasta han advertido la posible expulsión del país del PNUD y otras agencias de las Naciones Unidas.

La actuación del gobierno guatemalteco ha encendido las alarmas de la comunidad internacional, quien con profunda preocupación constata el incremento en las violaciones de DDHH, intensas campañas de difamación y amenazas contra defensores de derechos humanos, el incremento de asesinatos de luchadores/as sociales, una sistemática agresión contra operadores de justicia comprometidos con la lucha en contra de la corrupción e impunidad, la recuperación del control de las fuerzas de seguridad por parte de grupos vinculados al crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, así como las iniciativas de leyes regresivas en materia de derechos, incluyendo una iniciativa de amnistía total que busca la libertad de los exmilitares condenados por genocidio y delitos contra la humanidad cometidos durante la guerra.

Simona Violetta Yagenova es investigadora/profesora universitaria, integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

Hay quienes afirman que los retrocesos actuales obedecen a acuerdos políticos entre quienes han sido señalados por parte de la CICIG de integrar redes económicas-políticas ilícitas, que de manera sistemática han saqueado al Estado de Guatemala, lo que conllevó a la captura de empresarios, militares, exmilitares, integrantes de partidos políticos y funcionarios políticos, incluyendo a familiares del actual presidente de la República, acusados por supuestos actos de corrupción. La actuación de la CICIG/MP desnudó indudablemente las históricas y actuales modalidades del saqueo, de la corrupción y la forma como el capital mafia cooptó al Estado.

Pero los sucesos actuales no se pueden explicar solamente a partir de los éxitos de la CICIG. En el año 2011, se tuvo conocimiento que grupos provenientes de exmilitares, familiares de los acusados por crímenes de lesa humanidad y masivas violaciones a los DDHH ocurridos durante la guerra, de manera coordinada con otros personajes de la ultraderecha nacional y con el apoyo de aliados internacionales de esta misma corriente ideológica, acuerdan implementar un repertorio diverso de acciones para recuperar poder e influencia en los tres organismos del Estado, intensificar su campaña y accionar para debilitar las luchas populares, evitar la emergencia de una fuerza política democrática progresista y ponerle coto a las demandas y juicios contra miembros de las fuerzas armadas por hechos ocurridos durante la guerra.

Esta rearticulación estratégica ha contado con el respaldo de fuerzas políticas ultraconservadoras y anticomunistas muy activos en el subcontinente tras las sucesivas victorias electorales de fuerzas socio-políticas de izquierda, que comenzaron paulatinamente a gobernar la mayoría de los países del subcontinente a partir del año 1999.

La victoria electoral del Partido Patriota, encabezado por el ex general Otto Pérez Molina, quien asumió la gestión gubernamental en el año 2012, potenció la estrategia acordada en

el 2011. Durante los años siguientes, se pudo constatar: a) un incremento de la represión y remilitarización de los territorios; b) la ubicación de exmilitares en puestos claves de la institucionalidad estatal; c) la reactivación del discurso anticomunista, ultraconservador que reprodujo la campaña de difamación contra los gobiernos progresistas de América Latina y se enseñaba en contra de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo en las redes sociales y medios locales afines; d) el incremento de la criminalización de la protesta social en contra de los activistas y defensores de derechos humanos; e) se comienza a presionar a integrantes de los cuerpos diplomáticos comprometidos con temas de DDHH; f) se potenciaron las redes político-electorales ilícitas y saqueo de los fondos estatales por parte de mafias y grupos criminales.

Esta estrategia sufre un retroceso en el 2015, cuando el binomio Pérez Molina/Baldetti tuvo que renunciar por acusaciones vertidas en su contra por parte de la CICIG/MP. Ambos fueron ligados a proceso y están encarcelados en la actualidad.

Con la victoria electoral del partido FCN, estos mismos grupos recuperan el poder, encontrando un nuevo aliado en el régimen de Trump, con quien coinciden ideológicamente en la política exterior en materia de DDHH, su posicionamiento frente a la ONU y el atávico odio a los gobiernos de izquierda y revolucionarios. La alianza con el eje sionista no es sorprendente, tomando en consideración el estrecho vínculo de los militares y exmilitares con Israel, desde los tiempos de la guerra, y el soporte que brinda en materia de seguridad e inteligencia y la alianza de éstos con los evangélicos fundamentalistas.

Las elecciones generales que se realizarán en junio de este año incrementarán la tensión y crisis política, así como las contradicciones entre los grupos que controlan el ejecutivo. La política exterior norteamericana hacia Guatemala oscilará de una manera esquizofrénica entre quienes apoyan a candidatos con similar

posicionamiento al gobierno actual y quienes apuestan a figuras que puedan relegitimar el sistema político y jurídico existente. Sean los demócratas o republicanas, la presión para que Guatemala se mantenga en el eje golpista contra Venezuela se mantendrá.

La izquierda entra a este proceso profundamente dividida, con cuatro partidos y candidatos presidenciales diferentes. Thelma Aldana, exfiscal que recibió un importante reconocimiento por su trabajo con la CICIG en la lucha contra de la corrupción, se postulará como candidata presidencial. Según encuestas preliminares, tendría altas posibilidades de ganar las elecciones. En un twitter publicado el 12 de febrero 2019, afirmó su apoyo al autoproclamado fantoche del imperio, aunque éste le generó múltiples críticas.

De cara a la amenaza de intervención o posible agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, la región centroamericana a nivel gubernamental parece inclinarse hacia la política exterior norteamericana, con excepción de Nicaragua. El mover el posicionamiento de la región hacia una posición de neutralidad o en apoyo a la promovida por México y Uruguay constituye una tarea política ineludible para las fuerzas democráticas, de izquierda, pueblos y movimientos sociales de la región. La batalla por el futuro de la patria grande se juega hoy en la República Bolivariana de Venezuela y no hay cabida ni para el pragmatismo político, ni el silencio ante semejante amenaza que tendrá nefastas consecuencias para nuestros pueblos. ☞

The image shows a screenshot of the website www.alainet.org. The main content area displays several news articles and sections, including:

- AMERICA LATINA en movimiento** (header)
- ENTÉRATE COMO COMUNITARIO** (section)
- INTERNET** (section)
- Elecciones** (section)
- Libros Digitales** (section)

On the right side, there is a blue sidebar with the website's URL www.alainet.org written vertically. Next to it is a list of features:

- > realidad regional actualizada diariamente
- > dinámicas sociales
- > noticias, opinión y análisis
- > más de mil documentos clasificados
- > búsquedas por tema, autor, fecha, país, palabra clave

Panamá sigue la línea de EEUU en su política hacia Venezuela

Marco A. Gandásegui, hijo

A pesar de los avances significativos realizados por Panamá para afianzar su soberanía en la segunda mitad del siglo XX, después de la invasión militar norteamericana en 1989, los gobiernos han sido subordinados nuevamente a las demandas de EEUU. En lo político, sigue la línea del Departamento de Estado. A pesar de considerarse ‘neutral’ frente a los conflictos internacionales, se sumó al Grupo de Lima creado por EEUU para aislar y desestabilizar al gobierno bolivariano de Venezuela. En lo económico, se encuentra bajo la tutela del Departamento de Comercio. Recientemente, el gobierno fue obligado a aprobar legislación que pone su sistema fiscal bajo órdenes de EEUU. Poco después, tuvo que expulsar de su lista de 12 mil barcos bajo la bandera de conveniencia panameña a las naves de propiedad iraní. En lo militar, coordina estrechamente con el Comando Sur, que financió y construyó una docena de bases aeronavales sobre ambas costas panameñas.

En un comunicado emitido en enero de 2019, la Cancillería panameña ‘condenó’ lo que considera la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro asumiera el poder para un segundo periodo. Al mismo tiempo, la canciller panameña, Isabel de Saint Malo, no descartó que el país pudiera adoptar nuevas medidas en contra del gobierno del presidente Maduro.

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

Las declaraciones del gobierno panameño, sin embargo, no tienen mayor sustento. Son simulaciones frente a las presiones de Washington. A diferencia de 2018, cuando rompió relaciones con Caracas, el gobierno panameño en esta ocasión se abstuvo de hacer lo mismo. Las relaciones comerciales entre empresarios panameños y el mercado venezolano son muy importantes para que el presidente Juan Carlos Varela tome una decisión de ese tipo.

Según la Cancillería, “romper relaciones diplomáticas con el país sudamericano afectaría los intereses económicos y comerciales del Istmo”. Las exportaciones panameñas a Venezuela incluyen una amplia variedad de productos -especialmente de China- que re-exporta la Zona Libre de Colón. También suspendería los vuelos de la línea aérea COPA que representa un fuerte ingreso para el grupo económico más poderoso del país.

A pesar de que el gobierno panameño ‘condenó’ a Venezuela en enero, la embajada y el consulado del gobierno bolivariano siguen atendiendo al público normalmente. La Cancillería panameña también recibió -desconociendo la Constitución Política- a una representante de la Asamblea Nacional venezolana (no reconocida por la Corte Suprema de Venezuela y declarada en desacato) que dijo ser enviada por el autoproclamado ‘presidente interino’ del país bolivariano. A pesar de no tener oficina, recursos propios y sin apoyo, cuenta con el respaldo de la embajada de EEUU. Este respaldo y el haber sido recibida por la Cancillería le permi-

te desplazarse por la capital.

A pesar de la solicitud de EEUU para reforzar el aparato militar que eventualmente encabezaría una invasión armada, los países de la región aún no han respondido. En el caso de Panamá, hasta el momento el gobierno no ha comprometido sus dos regimientos militares creados después de la invasión por el Pentágono y entrenados por Israel. En una conferencia de prensa, la vicepresidenta de Saint Malo resaltó que en “Panamá se inauguró el primer Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, con el que se fortalece el rol logístico del país”. Colombia, Brasil y Curazao (una colonia holandesa en el Caribe) están apoyando a EEUU en su táctica de llevar contendores a la frontera cerca de Cúcuta en Colombia como parte de la llamada ‘guerra humanitaria’. Panamá todavía no ha entrado en acción. A su vez, un avión norteamericano que partió de Puerto Rico con destino a Venezuela nunca llegó a su destino. EEUU no ha informado aún cual fue su paradero.

Los sectores populares panameños han manifestado su rechazo a la política entreguista de la Cancillería panameña. Estudiantes, obreros y otros sectores han mostrado su solidaridad con la revolución bolivariana. El Frente Amplio por la Democracia (FAD), partido político que aglutina a los intereses de los trabajadores, también ha manifestado su apoyo. En cambio, los partidos políticos de la oligarquía han optado por una posición de silencio. Por un lado, no quieren provocar a Washington con cualquier pronunciamiento que no sea de condena. Por el otro, sin embargo, temen crear problemas con los sectores económicos que comercian con Venezuela.

Elecciones y continuismo

En mayo, se celebran elecciones en Panamá y ya han sido oficializados 7 candidatos para la Presidencia de la República. Los tres partidos dirigidos por intereses oligarcas tienen discursos sin contenido pero que reflejan los intereses neoliberales. Han estado en el poder desde 1989 y han creado una estructura que responde a las políticas de desregulación, privatización y

flexibilización de la fuerza de trabajo. El único partido político que levanta una bandera reformista es el FAD. A diferencia de los partidos oligarcas, reivindica la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hay otros tres candidatos que se presentan utilizando el mecanismo de la libre postulación. El FAD es el único partido político que expresa públicamente su condena a la agresión norteamericana contra Venezuela.

Los medios de comunicación masivos (televisión, radio y prensa escrita) se han plegado a la propaganda norteamericana. Llenan sus noticieros con información de los servicios mediáticos de EEUU que citan constantemente las palabras del presidente Trump quien asegura que “una invasión militar es una opción que tiene sobre la mesa”. En las redes virtuales hay un enfrentamiento permanente entre los partidarios de una intervención militar por parte de EEUU contra Venezuela y los que promueven el diálogo y la paz.

Aunque los medios panameños recogen de manera masiva todas las noticias falsas que envía EEUU, no promueven y restringen el debate en torno a la cuestión venezolana. Los voceros que promueven la posición de EEUU son pocos y muy bien escogidos. Existen algunos columnistas que -al contrario- prestan su pluma para defender la revolución bolivariana.

Las elecciones en mayo arrojarán como ganador uno de los candidatos de los tres partidos oligarcas. Su posición frente a la guerra declarada por EEUU contra Venezuela continuará siendo la misma que la del actual gobierno. Es decir, seguir comerciando con Venezuela, incluso en tiempos de guerra. Los gobernantes panameños, que son un reflejo de los intereses oligarcas, no tienen interés y rechazan la idea de reconstruir una plataforma nacional incluyente para hacer respetar la soberanía del país. Como consecuencia, como en el caso de Venezuela, no respetan el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Exponen a Panamá a ser objeto de ataques provenientes del extranjero, como lo fuimos hace 30 años. (13/02/2019) ☞